

CAMBIO ESTRUCTURAL Y DISCURSO GLOBALIZADOR: PARA UN PANORAMA GENERAL

Rolando Cordera Campos¹.

Facultad de Economía, UNAM

El estallido de la crisis de la deuda externa en 1982 ha sido visto como el final de una etapa en la historia del desarrollo mexicano. No fue para menos. En ese año, el producto interno bruto (PIB) descendió en 0.62 y 4.2% al siguiente, lo que al compararlo con las tasas de crecimiento previas de más del 8% coloca en contexto la profundidad del choque ocurrido en el sistema productivo nacional. Algo similar ocurrió con la formación de capital que registró una caída de 15.9% en 1982 y 27.8% en 1983. En especial, la inversión pública resintió un declive significativo que afectó proyectos en curso o detuvo el inicio de otros que eran vistos entonces como cruciales para hacer realidad una siembra productiva y a largo plazo de la riqueza petrolera que había llevado al auge económico del país a partir de 1978. Por su parte, los precios crecieron por encima del promedio de los años anteriores, la tasa de inflación alcanzó un 98.8%, el tipo de cambio se devaluó como en cascada (de 26.41 pesos por dólar al final de 1981 a 150 por dólar al final de 1982) y se dio una fuga de capitales que no parecía tener más fin que el agotamiento de las reservas internacionales de México.

En contraste, tómese nota que entre 1978 y 1981 la economía creció a tasas superiores al 8%, de 8.96% en 1978, 9.7% en 1979, 9.23% en 1980 y 8.77% en 1981. La formación de capital hizo lo propio pero por encima del crecimiento del PIB: en 1978 avanzó en 15.12%; en 1979 en 20.2%; en 1980 en 14.9% y en 1981 en 14.7%. Ciertamente, los precios registraba ya índices de crecimiento altos, superiores a los que habían marcado el arranque de la inflación en los primeros años setenta. En 1978, la inflación creció en 17.51%, para elevarse al 18.20%, 26.23% y 28.08% en los años siguientes. Por su parte, la deuda pública externa llegó a niveles muy altos: en 1975 representaba el 16.42% del PIB, para llegar en 1978 al 23.61%. A partir de ese año, sin embargo, gracias sobre todo a las elevadas tasas de expansión del producto, la deuda bajo al 22.1%, 17.36% y 21.15% en los tres años siguientes. Gracias a la dinámica de las exportaciones petroleras, el déficit en la cuenta corriente parecía estar bajo control, pero ya en 1981 representó un 5.23% del PIB, por encima del nivel que había precipitado la devaluación de 1976 (5.05% en 1975 y 4.22% en 1976). Era claro que el alto nivel de endeudamiento empujaba el déficit externo a la alza, sobre todo si se considera que en 1981 se dio un cambio significativo en la composición del endeudamiento a favor de la deuda a corto plazo y en detrimento de la de largo plazo. Entre 1878 y 1980, la deuda pública externa de corto plazo representó en 1.2%, 1.07% y 0.77% del PIB, en tanto que en 1981 llegó a significar el 4.29% del PIB. Con todo las

¹ Profesor Titular "C" Tiempo Completo Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de México; Centro de Estudios Globales y de Alternativas para el Desarrollo de México Facultad de Economía, UNAM

expectativas y realidades que trajo consigo la bonanza petrolera de esos años, era claro que las relaciones básicas de la dinámica macro económica no apuntaban al equilibrio y que, además, con todo y las ganancias externas producidas por las ventas de crudo, el país encaraba ya con toda fuerza su talón de Aquiles histórico condensado en la tendencia al desequilibrio externo.

De cualquier forma, puede decirse que el trauma de 1982 fue demoledor y puso a flote contradicciones de todo tipo, sumergidas o a flor de tierra, que apuntaban a la necesidad urgentes de cambios. Empujados por el draconiano ajuste externo decidido por el gobierno del presidente De la Madrid, y poco después por la convicción en las cúpulas del poder político y social de que el ajuste era no sólo insuficiente sino incapaz para enfrentar los desafíos de una economía desequilibrada y estancada, los cambios empezaron a hacer su estreno en la atribulada escena política y social mexicana.

No sólo en lo económico sino también en lo político y en lo social, el país ha registrado desde entonces mutaciones enormes, articuladas por el proyecto de globalizarlo cuanto antes y, por esa vía, sacarlo de la espiral de sobre endeudamiento, inflación, devaluación y descalabros productivos que caracterizaron el final de los años setenta y la totalidad de los ochenta. De esto trata este volumen destinado a ofrecer opciones de interpretación de lo que significó la crisis aquella, que en realidad fue varias crisis, y de lo que han implicado los cambios de estructura e instituciones con los que se ha buscado superarlas.

La crisis fue desde luego financiera y monetaria e inmediatamente económica y productiva, pero también recogió y dio lugar a una dramática ruptura en el modo como acostumbraban relacionarse los grupos dirigentes del Estado con los grupos dominantes en la economía y la sociedad. La nacionalización bancaria de aquellos años reveló de modo brutal las enormes brechas existentes en el esquema de cooperación entre el sector público y el privado que, durante el gobierno anterior, el del presidente Echeverría, habían empezado a aflorar al calor de diversos acontecimientos económicos y políticos y del activismo presidencial que buscó a toda costa sellar con crecimiento económico las fallas en el sistema político que el 68 había desvelado a un costo muy alto en términos de vidas, sangre y expectativas juveniles. La “regla de oro” del sistema mexicano, como gustaba llamarla el senador José Luis La Madrid, empezó a conocer sus últimos tiempos. El reconocimiento de la presidencia mexicana como el lugar de las decisiones de última instancia en la política del poder pero también en la economía, empezó a ser acremente cuestionado desde las propias cúspides de la empresa privada y la necesidad de corregir a fondo el régimen del presidencialismo autoritario heredado de la Revolución Mexicana se volvió idea fuerza del reclamo democrático que hasta entonces habían protagonizado sobre todo grupos populares, sindicatos, organizaciones agrarias y los estudiantes que lo habían convertido en exigencia fundamental, primordial de la democracia, en las jornadas de 1968.

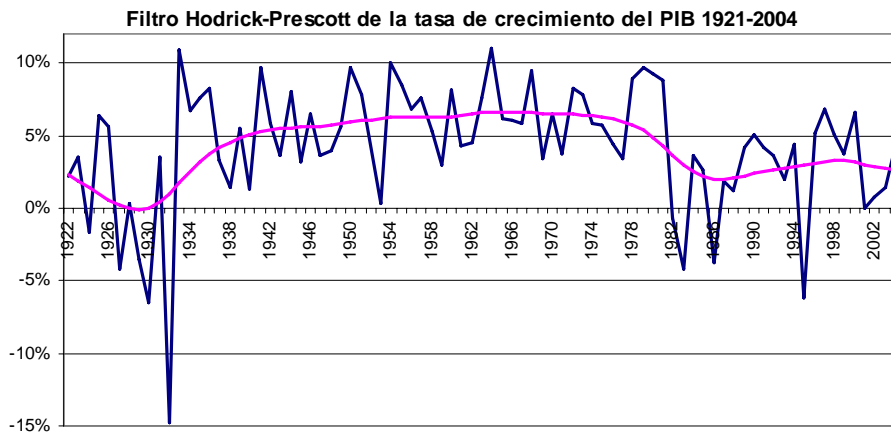
La crisis económica de aquellos años llevaba casi de manera natural a preguntarse si no había algo más profundo, estructural, debajo del desbarajuste económico y financiero que había provocado, o hecho evidente, el estallido del conflicto de la deuda. Es decir, si debajo de los desequilibrios

financieros domésticos y externos, y detrás del conflicto entre el sector público y el privado, no había desarreglos y desencuentros mayores en el conjunto de la organización estatal que propiciaban enfrentamientos recurrentes que buscaban saldarse con medidas de corto plazo, que afectaban las finanzas públicas y luego al entorno macro económico, hasta aterrizar en descalabros cambiarios cada vez mayores y en una corrosión progresiva de un sistema financiero cuyo punto crítico es, al final del día, la confianza que pueda generar en el público, en los poderes de hecho y de derecho y desde luego en los prestamistas e inversionistas internacionales.

Sin embargo, en los primeros momentos después de la crisis de aquel año, de lo que se trataba, al decir del presidente de la Madrid que tomó posesión en medio de la tormenta, era de “evitar que el país se nos fuera entre las manos”.

Para lograr este propósito, el gobierno sometió a la sociedad y su aparato productivo, decaído pero todavía prácticamente intacto y en parte ampliado y remozado gracias al auge petrolero, a un drástico ajuste externo y fiscal que tenía como objetivo principal y casi único crear el excedente necesario para continuar pagando la deuda y, gracias a ello, poder retornar pronto a los mercados internacionales financieros y retomar el crecimiento que entonces no sólo se perdía como resultado de la crisis financiera sino de una decisión de Estado. Como se sabe, la estrategia no rindió los frutos esperados y más bien se convirtió en una “política económica del desperdicio” como la bautizaran en aquellos años Vladimiro Bralilovsky y Natán Warman. Lo más grave es que a partir del ajuste, la economía empezó a trazar una trayectoria de crecimiento distinta a la histórica, con menor dinamismo promedio y, en consecuencia, con una menor capacidad para crear empleos formales, precisamente en el periodo en que empezaba a abrirse paso la transición demográfica del país, para dejar en pocos años de ser una sociedad de niños y volverse, como lo que es hoy, una sociedad de jóvenes adultos.

Gráfica 1

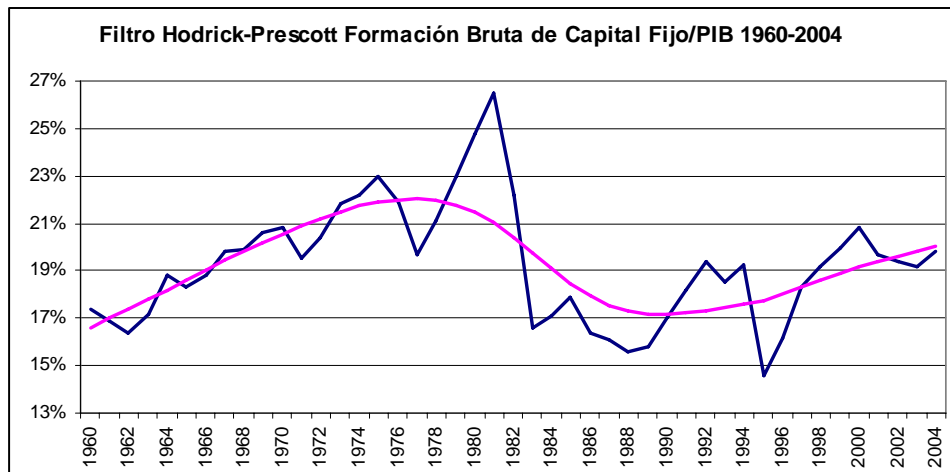


Fuente: Cálculos propios con base en datos de INEGI

Como se observa en la gráfica 1, tras un periodo donde la tendencia de la tasa de crecimiento era ascendente hasta alcanzar una meseta en el final de la década de los años sesenta, la dinámica de crecimiento se redujo lentamente durante la década siguiente, debido a que con la crisis de 1982 se gestó un cambio de nivel en la serie, una alta volatilidad y una reducción considerable y rápida del ritmo de crecimiento.

La inestabilidad que caracterizó la economía a partir de la crisis de la deuda de 1982 también se observó en la tasa de acumulación de la economía.

Gráfica 2



Fuente: Cálculos propios con base en datos de INEGI

Como puede observarse, desde 1960 hasta 1981 el porcentaje de la FBCF con respecto al PIB tuvo un ascenso continuo hasta llegar al 26.5% en este último año, después de superar una reducción pequeña durante la crisis de 1976. De 1981, en adelante, la acumulación de capital entró en una ruta declinante hasta llegar a niveles inferiores al 20% del PIB, con una cota mínima en 1995 del 14.5%. Las recuperaciones observadas desde este año, en que el país encara la peor de sus caídas económicas,

no han podido superar la trayectoria impuesta por las crisis de los años ochenta y como consecuencia México enfrenta en la actualidad un serio reto en cuanto a la posibilidad real que tenga de “recuperar” un futuro deteriorado seriamente ya por la falta de inversión pública y privada. El retroceso de la primera, además, ha implicado notables daños a la infraestructura y en parte humana y social de México y muchas de sus omisiones se expresan ya como agudos embotellamientos que estrangulan las posibilidades de retomar la senda de crecimiento histórica que se abandonó en 1982.

Fue al calor del fracaso de la batería de recetas convencionales con que se quería alcanzar el ajuste externo, se comenzó a deliberar en torno a la idea del cambio estructural. No se trató de una deliberación abierta y pública, mucho menos democrática, pero con insistencia se planteó en las cumbres de la economía y las finanzas, desde luego en los corredores del poder político, que este cambio estructural, hacia una economía abierta y de mercado, liberada hasta donde fuera posible de sus adiposidades corporativas y estatistas, era único camino único para que el país pudiera adaptarse e inscribirse sin tardanza en los portentosos cambios del mundo que adquirieron velocidad de cruce al desplomarse el sistema bipolar como consecuencia de la caída del sistema soviético, la irrupción del reclamo democrático a escala internacional, y la búsqueda de los caminos más rápidos y expeditos para recuperar “el tiempo perdido”. Es decir, capaz de globalizarse y no renunciar a los nichos potenciales que le ofrecía su posición geopolítica así como el tamaño de su población, su economía y sus recursos naturales estratégicos.

De lo que se trataba, como se insistía en la escena internacional, era de reencontrar la vía del mercado y del capitalismo que se había boqueado en buena parte de Europa y Asia, pero también en América Latina y África durante la Guerra Fría que, paradójicamente, había propiciado en buena parte del mundo la exploración de caminos intermedios, “terceras vías” del tipo más diverso. Así sonaba la tonada en buena medida inventada por los ganadores del gran conflicto, que luego se convertiría en una estridente “leyenda negra” del desarrollo anterior, en nuestro caso del crecimiento y la industrialización dirigidos por el Estado surgido de la Revolución Mexicana.

A partir de la caída del Muro de Berlín todo se volvió reformismo para la globalización que el llamado Consenso de Washington codificó en discurso y receta universal, y que habrían de declinar por igual checos y polacos, rusos y mexicanos, peruanos y brasileños. A los chilenos los habían forzado a hacerlo a sangre y fuego durante la dictadura de Pinochet y a los argentinos les había causado enormes destrozos de sus tejidos sociales y colectivos básicos, así como decenas de miles de muertos, en un enfrentamiento provocado por la utopía negra de implantar “una economía de mercado y una sociedad cristiana”. El proyecto así, a pesar de sus implicaciones negativas previstas por muchos, era

cosmopolita y en clara sintonía con el globalismo neo liberal que entonces pretendía haber logrado convertirse en pensamiento único.

Muchas reformas se hicieron para cumplir con el cometido de globalizar a México. Todas ellas, modificaron más o menos radicalmente las relaciones del Estado con el resto de la sociedad, y la reforma política consumada casi al final del siglo y del ciclo reformista neo liberal así lo confirmó. Economía y política responden ahora a otros códigos y claves; sus imperfecciones e ineficiencias pueden todavía atribuirse a los ecos del Viejo Régimen, pero en lo fundamental deben entenderse como fallas y defectos de los nuevos arreglos, fallas del mercado, como ocurre siempre salvo en la imaginaria neo liberal, pero también, en realidad sobre todo, fallas de un Estado que no acaba de definir su perfil ni de dar lugar al surgimiento de un nuevo orden democrático y de una nueva economía política, que permitan darle un sentido histórico a tanto cambio y reforma como los que México ha vivido. Este sentido histórico tiene que tener como punto duradero y sustentable de apoyo, a un crecimiento alto y sostenido que pueda estar por lo menos a la altura de las necesidades de empleo emanadas de la demografía.

Cambios ha habido y no han sido inocuos. Por ello, en busca de un nuevo curso, es preciso hacerse cargo de lo que han traído consigo, de sus efectos inmediatos y estructurales, antes de acometer nuevas mudanzas. Pasemos revista sumaria a las principales reformas.

La primera, buscó redimensionar el sector público y revisar a fondo el papel del Estado en la economía, así como redefinir las relaciones comerciales y financieras con el exterior. De ella emanaron las drásticas revisiones de la política comercial y las privatizaciones, la reprivatización bancaria, las nuevas reglas de apertura a la Inversión Extranjera Directa (IED) y, en parte, la reforma del Art. 27 de la Constitución para liberar la tierra ejidal y comunal.

Con estas reformas, se quiso incluso justificar el retraimiento absurdo de la inversión pública que ahora se tiene que lamentar. Ha quedado claro para todos, incluso para quienes soñaban con una economía donde todo quedara a cargo del mercado y de la inversión privada que, por definición y credo, siempre será más eficiente y racional que la pública, que la elasticidad y capacidad de sustitución del esfuerzo público por la iniciativa privada han sido lo que se quiera menos perfectas y oportunas y que, por ello, la economía no ha sido capaz de aprovechar eficientemente y a fondo, las ventajas reales y supuestas de la apertura a la globalización.

La segunda reforma, apuntó a los tejidos políticos del Estado post revolucionario y pretendió llevar a éste a una nueva etapa: a una democracia representativa que pudiese recoger la pluralidad social e ideológica y diese un cauce productivo y renovador a los conflictos y pugnas distributivas y por el poder que son propias de las sociedades complejas. Evadir el “México bronco” del que habló Don Jesús Reyes Heróles y darle un sentido progresivo a su socorrida frase de que el “que resiste apoya”.

Con la alternancia consumada en el año 2000 con la victoria del presidente Fox y la derrota del PRI, la conjunción virtuosa entre ambas reformas se puso a prueba y, vista desde esta perspectiva, apenas logró notas mínimas gracias a la estabilización de los precios internos y del tipo de cambio. Basado en la ilusión de reinventar la historia, decretando sin más que el país “había perdido setenta años”, el presidente Fox convirtió sus dichos de campaña en credo central de su gobierno y el entendimiento público y político del curso reformista y de los nuevos problemas que había hecho emerger sufrió un enorme daño.

Al final, lo que se impuso fue el estancamiento político y conceptual en el Estado, que se ahondó cuando el presidente resolvió que era la pluralidad desplegada en el Congreso de la Unión la responsable de la nociva trabazón en que se encuentra la república. Lo que no se logró, fue recuperar la senda perdida del crecimiento rápido y tanto el PIB como la inversión reportaron en estos primeros seis años del nuevo milenio desempeños mediocres. La resultante inevitable ha sido la corrosión del mercado de trabajo, la afirmación del empleo informal como una forma de vida casi mayoritaria, el desempleo o el sub empleo juvenil en masa y el incremento al parece imparable de la emigración que llegó en estos años a la cifra de más de 400 000 mexicanos que cada año dejan el país para irse a Estados Unidos. No sobra agregar aquí, que muchos reportes señalan que en proporción creciente estos emigrantes son jóvenes urbanos con un promedio educativo superior a la media nacional. La compensación que suponen unas remesas que han llegado ya a los 20 000 millones de dólares en los últimos años no alcanza para esta auténtica fuga de capital humano del sur al norte. La paradoja cruel de esta globalización es que el país pobre subsidia a través de su gasto educativo y en salud y otras erogaciones públicas, al país más rico.

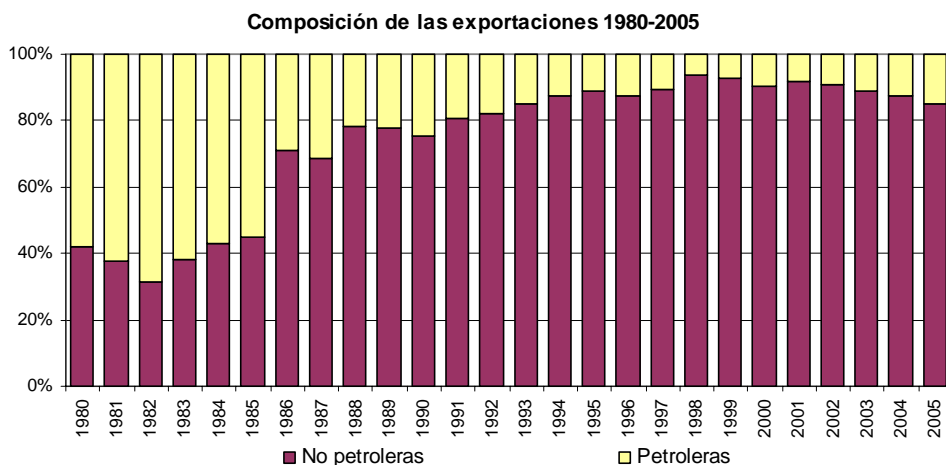
Es esta coyuntura la que exige una revisión del curso de la globalización de México y que se asuman riesgos explícitos en el diseño de nuevas políticas para la economía y el desarrollo social. Los arreglos políticos que dan sustento a la democracia reclaman también de revisiones urgentes, a la luz de lo acaecido en la contienda electoral de este año. Pero puede advertirse ya que el cambio político, vital como parece ser, tendrá que seguir la suerte de estos cambios en la economía política y las formas de distribuir el excedente social. Las reformas de la política democrática que reclama la situación resultante de la elección presidencial no podrá hacerse en solitario, además de que los actuales resortes y acomodos políticos que dieron lugar al cambio democrático tendrán que usarse, tal y como están, para intentar construir un cauce de entendimiento entre actores y comunidades que viven ya, con intensidad y angustia, una pugna distributiva, en buena parte todavía larvada, pero cuyas expresiones puntuales, en los sectores y en las regiones y localidades, adquieren signos cada día más ominosos.

No se trata de regatear los logros del curso reformista anterior: en menos de veinte años México se volvió un gran exportador de manufacturas pesadas y semipesadas, base poderosa de la producción y la exportación automotriz y electrónica y, en conjunto, sus ventas al exterior se multiplicaron por cinco.

También, superó su condición de economía casi monoexportadora, dependiente en alto grado de las ventas foráneas de crudo (en la gráfica 3) se observa el cambio drástico de la composición de las exportaciones durante la década de los ochenta y noventa)

Al calor de estas transformaciones en su estructura comercial, México atrajo montos considerables de Inversión Extranjera Directa (IED). En muy poco tiempo, el país se volvió uno de los tres principales socios comerciales de Estados Unidos y apareció en la escena comercial mundial como un nuevo y atractivo jugador de grandes ligas.

Gráfica 3

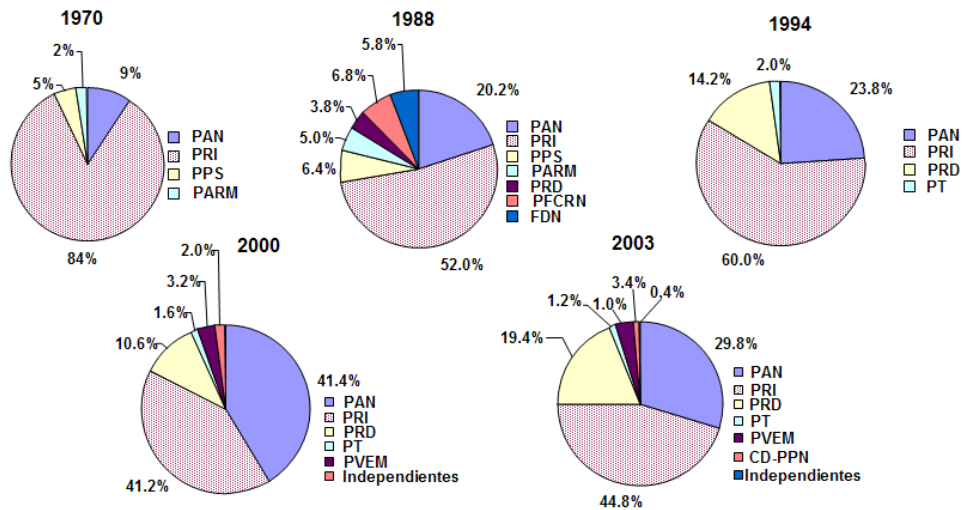


Fuente: Cálculos propios con base en datos de BANXICO

También puede presumirse que, a pesar de su lentitud, la reforma política rindió al final frutos considerables. Sin alejar la violencia política de su horizonte, como nos lo mostró el fatídico 1994, la democratización avanzó con rapidez a partir de ese año, propició la derrota del PRI en la Cámara de Diputados en 1997 y el primer gobierno electo de la capital quedó en manos de Cuauhtémoc Cárdenas, indiscutible pionero del cambio democrático mexicano. Con todo esto, se levantaron los diques a un federalismo siempre contenido y desnaturalizado por el poder central y se entró en la fase, que no ha terminado, de una regionalización y una descentralización feroz, casi salvaje, que, sin embargo, ha sido ya capaz de volverse una fuente de poder político decisiva dentro del actual Estado nacional.

Gráfica 4

Composición de la Cámara de Diputados



Al final del siglo XX, la reforma política electoral fue el cauce propicio de una alternancia pacífica en la presidencia de la República, que se combinó con una notable estabilidad financiera, un tipo de cambio bajo control, una inflación a la baja y un crecimiento económico que por primera vez en casi veinte años llegó a una tasa superior al 6% anual.

Pero, como se dijo arriba, el crecimiento se esfumó a partir de entonces y la economía se ha arrastrado en lo que va del nuevo siglo. La estructura social aparece desgarrada y los síntomas de pérdida de la cohesión social básica se le presentan a la sociedad todos los días. Sin duda, se trata de circunstancias que se afirman en el tiempo y amenazan con “hacer época”. Sus implicaciones inmediatas sobre la política democrática y la cohesión social no necesitan ser exageradas: definen la demografía política nacional y resumen con intensidad el enorme desafío que encara el país en el presente.

La reforma económica no ha podido fortalecer al Estado en sus finanzas, y más bien lo ha afectado por su permisividad fiscal hacia el comercio exterior y su secular ineficiencia para recaudar los impuestos que marcan las leyes. Hoy, a medida que se agudiza la percepción de las enormes desigualdades y de las cuotas mayúsculas de pobreza que afectan a las ciudades, el éxito exportador difícilmente puede servir para apoyar la legitimidad del sistema político democrático.

Las comparaciones son odiosas pero enseñan, y deberían servir para afinar los sentidos y atemperar reflejos para intentar un efectivo cambio de rumbo. En términos de producto per cápita, México ocupa el lugar 58 por debajo de Argentina, Costa Rica, Chile, Corea. Se estima que la familia mexicana promedio obtenía ingresos en 2002 por \$8, 450 dólares al año. Singapur y Hong Kong tenían tres veces más y Corea el doble. En 1950, Corea era tres veces más pobre que México en producto per cápita.

Con la educación ocurre algo similar. La escolaridad promedio en Corea ascendió de 8.7 años en 1985 a 10.8 años en el 2000. La nuestra fue de 5.2 años en 1985 a 7.2 años en 2000. Se estima que en 2004, la escolaridad promedio de la población económicamente activa era de 8.4 años. El decil más

pobre apenas cubría 3.6 años, el segundo llegaba a 4.9 y el tercero a 5.95. Sólo a partir del decil VII se superaba el promedio con 8.9 años. Los dos Deciles más ricos de la población económicamente activa registraban un promedio de escolaridad de 11.05 y 13.77 años.

Como se dijo, estos son datos duros que contrastan con las pretensiones del cambio estructural más profundo intentado en México en la segunda mitad del siglo XX. Desembocan en una circunstancia social de pobreza, informalidad laboral y extrema desigualdad. Según estimaciones del economista Gonzalo Hernández, el decil más rico tenía en promedio ingresos mensuales de \$30 000 pesos reales (pesos de 2003). El decil más pobre sólo llegaba a \$1 380 pesos al mes. La brecha de ingresos entre ambos deciles era de aproximadamente el 2, 050 %.

Por su parte, la democracia le dio forma y sentido al pluralismo social y político que el autoritarismo mantenía sofocado; abrió la puerta a un despertar ciudadano forjado al calor de los años de la modernización acelerada de los cincuenta y sesenta, y que se expresó en movilizaciones sociales y de trabajadores, en respuestas colectivas a la adversidad más cruel (el sismo de 85) y en una abierta oposición política (el 88 cardenista). Sin embargo. A juzgar por las conductas cotidianas de sus actores políticos por excelencia, los partidos y sus directivas, la reforma parece haber servido hasta la fecha más para afirmar la autonomía de los grupos políticos dirigentes respecto de la base social nacional que para obligarlos a la deliberación que es propia de la política plural moderna, mientras que los poderes de hecho, legales y no, se instalan festivamente en el centro de la política del poder y presumen sin recato de su hegemonía y capacidad de articulación del resto de las fuerzas políticas. El resultado es un panorama político y social de escisión profunda que, en 2005, alcanzó planos dramáticos con el intento de desafuero del entonces Jefe del Gobierno del D.F. Andrés Manuel López Obrador, orquestado por conspicuos representantes de las cúpulas empresariales y del propio gobierno federal. Este año, las debilidades del sistema político construido sin plan ni diseño de largo plazo durante el reformismo político impelido por las crisis de 1994-1995 dieron lugar a una grave crisis política que tardará en ser superada. La sospecha y la desconfianza en las instituciones y el Estado mismo reaparecieron, mientras que las contradicciones de fondo de la sociedad moderna mexicana, radicadas en una desigualdad inicua afloraron en un reclamo popular, por un lado, y en un atrincheramiento ofensivo de las cúpulas del poder y el dinero, que llevaron la iniciativa en una absurda convocatoria para reiniciar la lucha de clases en el país, y no sólo en el plano de la disputa política.

Así, más que una práctica "normal" de pluralidad partidaria, cabildeo y participación y deliberación política corporativa de los grupos de poder económico, hoy se vive una abierta "colonización" de la política democrática y del propio Estado por parte de las elites de la riqueza, a las que unen lo que queda vivo de las cohortes corporativas que dieron sustento al Estado pos revolucionario.

Las reformas cambiaron usos y costumbres, así como formatos y rutinas del cálculo económico, pero las dislocaciones que propiciaron no fueron interiorizadas oportunamente por el cuerpo social y

productivo que emergía, y es por eso que redundaron en un debilitamiento mayor del Estado, cuyas fallas, aparentes o inventadas en los primeros años ochenta del siglo pasado, sirvieron para justificar una reforma económica a rajatabla y, luego, una reforma política dejada al amparo de los votos.

Sin un Estado decidido a modular el cambio por él mismo desatado con el propósito de globalizar a la nación y modernizarla, lo que tenemos hoy es un Estado más débil que antes, sin capacidad fiscal y sin credibilidad política suficiente. La necesidad vital de una tercera reforma, la “reforma social del Estado” debía ser evidente para todos. No lo es, y es por ello que la idea de una reforma moral e intelectual es algo más que una hipótesis de trabajo. Iniciarla implica muchos riesgos pero es vital intentarlo antes de que las corrientes de descontento social, hoy todavía contenidas por las precaria represas del Estado y por la propia expectativa democrática, sean desbordadas.

Es preciso asumir y volver una forma de compromiso político y cultural, que la política democrática y la economía abierta deben estar incrustadas en una dimensión social atenazada por la desigualdad, la pobreza y las tendencias a la desintegración comunitaria y el desplome de la cohesión social. La reforma económica y política del Estado sólo encaró estas circunstancias con políticas subordinadas, dependientes de los cálculos elementales derivados de la estrategia de estabilización a toda costa, extrañamente aceptada y hasta aprobada en los hechos por todos los partidos y sus legisladores. Lo que ha brillado por su ausencia es una visión de largo plazo pero comprometida a concretarse en el corto, que asuma la centralidad de la equidad como requisito para un desarrollo mejor y para la superación progresiva pero sistemática de la pobreza que afecta a casi la mitad de la población del país.

Las decisiones que estuvieron detrás del cambio estructural para la globalización, incluida la reforma política, no son el fruto de ninguna ley natural. De esto se habla y bien en los textos que forman este libro. Mucho menos son el resultado de un mandato unívoco e inapelable de la economía o la historia. Las elites dirigentes y los grupos dominantes de la economía y las finanzas no consideraron que el de la desigualdad y la falta fehaciente de equidad eran temas cruciales, que su atención podía posponerse hasta lograr las metas de globalización y dinamismo económico planteadas. No se reconoció que fuera urgente ocuparse de él y actuaron en consecuencia.

El caso es que ahora, esta combinatoria de carencia e insatisfacción social elemental se ha vuelto tormenta política y movilización social multiforme, que pone a prueba la capacidad intelectual y ética de estas elites para encauzarlas y aliviar creíblemente a sus víctimas.

Volver a lo social y convertirlo en el objeto de la tercera reforma del Estado es fundamental porque sólo así podrán salvaguardarse y en el tiempo ampliarse las señas de identidad de la historia moderna de México: la dimensión intelectual, cultural, ética, de un Estado nacional forjado en la adversidad y que no puede renunciar por voluntad a sus obligaciones fundamentales. Al intentar hacerlo, supuestamente transformarse en Estado “ágil y esbelto”, en realidad ha minado su capacidad de conducción y de

mediación de un conflicto que es inevitable, pero que puede modularse si hay acuerdos básicos y sensibilidad mínima.

Las lecciones del cambio mexicano hacia la globalización son ya muchas y es preciso volver, como en las entregas que dan cuerpo a esta colección se ha intentado, sobre la experiencia y una historia que es todavía presente.

Es mucho lo que resta por hacer para darle solidez al entendimiento del cambio e inducir a una decisión de tomar riesgos para gobernarlo y darle un sentido redistributivo hacia la igualdad y la equidad con democracia y libertad. Lo que podemos postular aquí y ahora, es que después de veinte años de globalizar a la nación, es preciso y factible proponerse *nacionalizar* la globalización: crear capacidades productivas, institucionales e intelectuales, de imaginación histórica y sociológica innovadoras, para adaptar la tecnología global y hacer que la apertura al exterior funcione a nuestro favor y beneficio.

Más que continuar por la senda de las reformas interminables, de una, dos, “n” generaciones, lo que hay que acometer es la reforma de las reformas. Importar sin adoptar, sino para adaptarla a nuestras tradiciones y necesidades, la lección básica de los países que han sido exitosos en la globalización: ser heterodoxos frente al fundamentalismo del mercado único y la receta universal; ser ortodoxos en la afirmación de los intereses nacionales que en nuestro caso se originan en la cuestión social dominada por la desigualdad, la concentración del privilegio y la pobreza de las masas.

De estas concepciones y convicciones sobre el desarrollo y los cambios en su estructura, tiene que emerger la racionalidad de esta tercera reforma. De no avanzar pronto en esta dirección, lo que se pone en riesgo es la convivencia social y con ella la democracia. Lo que urge es darle al reformismo un sentido innovador que haga del riesgo una opción históricamente racional. Lo demás tendrá que volverlo ruta política y legal, de instituciones y de conducción económica, una pluralidad política que en su diversidad esté a la vez dispuesta a experimentar, para volverse una democracia social que pueda sostener un Estado democrático de derecho, capaz de darle sentido nacional a la globalización de México.

Ciudad Universitaria, 9 de octubre de 2006.